

Presentación

El núcleo de este número de *Controversia* está formado por algunos resultados parciales de las investigaciones adelantadas por el Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional, Odecofi, en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado. El Observatorio fue escogido por Colciencias como centro de excelencia en el área de Ciencias Sociales, y su objetivo central es analizar los condicionamientos, posibilidades, limitaciones y obstáculos que encuentran los programas regionales de desarrollo emprendidos en regiones severamente afectadas por la violencia. Odecofi concentra sus miradas en zonas como el Oriente y el Urabá antioqueños, los Montes de María y el Magdalena Medio, analizando la manera diferenciada como se insertan los actores armados en las diferentes regiones, para contrastarla con el modo como las políticas nacionales son modificadas en las regiones y en las localidades.

En un primer artículo, Andrés R. Vargas Castillo y Jorge A. Restrepo, investigadores del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Cerac, abren

un debate que no se ha dado en el país, sobre los alcances y limitaciones de la política de Seguridad Democrática, para romper con la unanimidad acrítica de sus numerosos partidarios políticos, analistas y formadores de opinión y la descalificación no menos acrítica de sus opositores. Vargas y Restrepo tratan de mirar con serenidad los logros y las limitaciones de dicha estrategia. La actualidad y urgencia de este debate, cuando se está hablando de la reelección presidencial, es innegable.

Las dudas sobre el éxito de la Seguridad Democrática reciben de Omar Gutiérrez, investigador del Cinep, una confirmación. Su análisis de la violencia en Arauca hace parte de su investigación sobre el Nororiente y Oriente del país. Aunque su investigación cubre 20 años de violencia, el artículo se concentra en el período del 2002 al 2009, que es el período de consolidación de la Seguridad Democrática. Gutiérrez contrasta el optimismo de la clase política y de las Fuerzas Armadas frente a la reducción de homicidios, atentados, secuestros y cultivos de coca, además de la muerte o captura de importantes jefes guerrilleros, con la persistencia y aumento en 2006-2009, de la violación de los derechos humanos con los asesinatos de civiles a manos de las “Águilas Negras”, así como de las ejecuciones extrajudiciales de inocentes por obra del Ejército, amén de la continuación de la lucha guerrillera.

Clara Inés Aramburo, del Instituto de Estudios Regionales, Iner, de la Universidad de Antioquia, centra su análisis en la relación entre las territorialidades y el conflicto armado en el Urabá Antioqueño. Muestra cómo una región tan heterogénea se fue construyendo gracias a la interacción de cinco etnias diversas, una clase empresarial y unas guerrillas, que tejieron su propia geografía del conflicto, en la que irrumpe el paramilitarismo para reestructurar la región según sus intereses.

6 Controversia

Estas miradas a la Seguridad Democrática se enriquecen con el análisis de largo plazo de Teófilo Vásquez sobre las relaciones entre problema agrario, economía cocalera y conflicto armado. Para él, las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto armado tienen como trasfondo histórico el problema agrario no resuelto y el proceso concomitante de formación del Estado. Así mismo, recupera el carácter ideológico y político de los actores armados que pretenden imponer un nuevo modelo de sociedad.

También adopta la perspectiva de largo plazo el estudio de Silvia Otero sobre las razones no solamente técnicas sino también muy políticas para la desigual integración del territorio, puesta en evidencia por el desarrollo de las vías de comunicación que muestra una gran precariedad del transporte, la cual por un lado no integra las regiones marginales con el centro del país y, por otra, dificulta el acceso de las regiones productoras al mercado mundial. La relación del desarrollo vial con el modelo económico preponderante en cada momento y con las relaciones coyunturales de las clases políticas con el Estado central arrojan mucha luz sobre la manera como se ha configurado la red de vías de Colombia.

Jorge I. González, Marta Cardozo, Rubén Maldonado, María V. Angulo y César López del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional de Bogotá, estudian el circuito económico entendido como la relación entre bienes básicos y bienes excedentes, y relacionan la función distributiva con la geografía económica. El estudio mira las centralidades y las convergencias en los Montes de María y anota las dificultades provenientes de dinámicas centrífugas muy comunes también en otras regiones del país.

Una aproximación análoga a la integración regional de los Montes de María es la que hace Ledis Múnera, del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de San Buenaventura, Gides, de Cartagena,

en una perspectiva de sociología jurídica. En ella se analiza el papel de la ley y los juristas en la gestación de la idea de Estado y de su acción en la vida cotidiana de las poblaciones, a partir de observación participante, entrevistas y documentos. Aparece la preferencia de las organizaciones por recurrir a las instancias nacionales, saltándose las departamentales, y el refuerzo de dicha actitud mediante mecanismos como la tutela y el derecho de petición. En el mismo sentido los análisis de Delio Maya y los de Angélica Montes, del Gides, describen el funcionamiento del Estado local y la apropiación del discurso de los derechos humanos respectivamente. El primero da cuenta de muchas de las interacciones que llevan a la producción de la normatividad local aunque no logre abarcarlas todas. Subraya la importancia de la inspección de Policía. Por su parte, Montes anota cómo en el discurso de los derechos humanos que circula en los Montes de María se combinan la visión contractual moderna y la iusnaturalista cristiana. Es interesante la profundización que la autora realiza del papel de las creencias e instituciones religiosas en la producción de imaginarios sociales y en la concepción que la gente se hace del Estado y de la forma de lidiar con él.

Todos estos abordajes del tema jalonan el camino que los estudios sociales deben abrir y recorrer en un entorno muy desigual y en un país cuyas instituciones no tienen aún la capacidad de manejar con propiedad y fluidez las tensiones de la convivencia. Al mismo tiempo, en algunos de ellos se advierte, con perspicacia, cómo la construcción de la democracia no se puede realizar, a menos que las iniciativas para refundar y gestionar esas instituciones democráticas provengan de quienes las necesitan para resolver sus problemas. Este arranque desde abajo, sólo da resultados si se ejecuta en unión con aquellos que han sido elegidos para gerenciar dichas instituciones. Es, desde luego, un modelo utópico, con todo, realizable en parte, cuando los entornos heterogéneos logran descubrir algunos mecanismos para lograr acuerdos parciales sobre estrategias comunes. La seguridad y la democracia

8 Controversia

son los frutos del acuerdo y nunca crecen en los territorios polarizados. La resolución segura de los problemas en el método democrático no tiene más camino que la palabra. Una palabra veraz e inquebrantable como palabra de gallero.

Bogotá, junio de 2009

**II^{do}. Concurso FONDO DE APOYO A LAS REVISTAS DE CIENCIAS
SOCIALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

“JUAN CARLOS PORTANTIERO” (2008)

La *Revista Controversia* fue seleccionada entre los proyectos ganadores del **II^{do}. Concurso del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe “Juan Carlos Portantiero”**. Este reconocimiento al proyecto editorial avalado por el **Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)** permite financiar el presente *Número Especial*.

CLACSO es una red de 254 instituciones académicas que realizan actividades de investigación, docencia y formación en el campo de las ciencias sociales en 25 países:
www.clacso.org